

Documentos de la

DEMOCRACIA

#6

*El Papel
de un Poder Judicial
Independiente*

por

Philippa Strum

We the People

Documentos de la

DEMOCRACIA

“Muchos juristas de los Estados Unidos consideran que el sello distintivo y el orgullo de nuestra nación es la revisión constitucional por los tribunales en la esfera de los derechos humanos. Yo estoy de acuerdo”.

*Juez de la Corte Suprema
Ruth Prader Ginsburg*

Director Ejecutivo: George Clack / **Editor:** Melvin Urofsky

Director Administrativo: Paul Malamud. / **Director Artístico:** Thaddeus A. Miksinski, Jr.

Traducción: Angel Carlos González / **Composición Tipográfica:** Leticia Fonseca G.

ACERCA DEL AUTOR:

Philippa Strum es Profesora Emérita Breukleundian de Ciencia Política en la Escuela Superior Brooklyn, Ciudad Universitaria de Nueva York y Profesora Visitante Gibbs de Derecho Constitucional en la Universidad Estatal de Wayne. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre el tema del gobierno de los Estados Unidos, lo cual incluye el poder judicial y los derechos humanos en este país.

La elección presidencial del 2000 se prolongó más y más en los Estados Unidos ante la consternación de muchos. Los votos decisivos fueron emitidos en el estado de Florida, y mucho después del final del día de la elección, se planteaban preguntas en torno a la posibilidad de que algunos de los sufragios de ese estado no hubieran sido contados a causa de un error mecánico y qué se debía hacer en caso de que así hubiera ocurrido. Entonces intervino la legislatura del estado de Florida, lo mismo que un buen número de jueces estatales. Así pues, pronunciaron discursos acalorados la secretaria de estado de Florida y miembros del Congreso de los EE.UU. Los partidarios de ambos candidatos, George W. Bush y Al Gore, hicieron manifestaciones de protesta en Florida y en otros lugares de todo el territorio de los Estados Unidos.

Mientras la controversia se exacerbaba, el caso fue sometido a la consideración de la Corte Suprema de los EE.UU. En la resolución emitida, la Corte declaró que, en efecto, Bush se había impuesto a Gore.

Y allí terminó el asunto. Gore pronunció un discurso para felicitar a Bush. Los que protestaban se fueron a sus casas; los políticos del partido que había perdido la presidencia se presentaron por televisión para decir que era el momento de unir fuerzas y atender los asuntos de la nación. Por supuesto que no todos estaban contentos con la decisión del tribunal, pero era casi unánime la opinión de que debía ser aceptada. Y aun cuando se murmuraba acerca de las preferencias políticas de algunos de esos jueces, nadie dudaba que habían tomado su decisión en un plano de total independencia de otros actores políticos.

La independencia del poder judicial federal y el consenso social de que los pronunciamientos de aquél deben ser acatados son un sello distintivo del sistema político de los Estados Unidos. De hecho, ningún otro tribunal del mundo tiene algo que siquiera se asemeje al extraordinario poder de esta Corte Suprema para decidir sobre disputas sociales, interpretar la Constitución nacional y forjar la política pública. William Rehnquist, presidente de la Corte Suprema en la época de la querrela en torno a la elección, había comentado varios años antes que el poder

judicial del país es “una de las joyas de la corona de nuestro sistema de gobierno”.

Una pregunta que se plantea con frecuencia acerca del poder judicial de los EE.UU. tiene dos partes. Primera, ¿por qué adoptó este país un mecanismo en el cual unos cuantos jueces que han sido designados y no elegidos (y que detentan sus cargos en forma vitalicia) les dicen a las demás ramas del gobierno lo que pueden hacer en forma legítima? Segunda, ¿cómo puede alternar este tipo de poder constitucional con el gobierno de la mayoría que está implícito en un régimen político democrático? La respuesta a la primera parte radica en el punto de vista estadounidense de lo que es en realidad el gobierno.

Creación del poder judicial federal

Los padres de la patria que redactaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Constitución de 1789 creían que los derechos del pueblo eran un concepto anterior a la existencia de los gobiernos. Los seres humanos nacen con ciertos derechos, afirmaron en la Declaración, y el propósito del gobierno es proteger y respaldar esos derechos. Por ejemplo, el gobierno tiene que salvaguardar el bienestar material de la población y proteger sus propiedades, y esa es la razón por la cual existen leyes penales y funcionarios del gobierno a cargo de su aplicación.

Pero si el nuevo gobierno protege a las personas, cuidando a unas de las otras, razonaron los forjadores de la Constitución, ¿quién protegerá entonces al pueblo de los abusos del gobierno? Éste podría estar equivocado, podría ser despótico, podía abusar de la confianza de la población y conculcar sus derechos. Uno de los factores cruciales del pensamiento político estadounidense es la convicción de que todas las instituciones son corruptas en potencia y que todos los políticos se pueden corromper, no sólo por el atractivo tangible del dinero, sino también por otra causa, aún más perniciosa, que es la santurronería. Es fácil que quien detenta el poder crea que todo lo que quiere hacer es, por definición, el modo de proceder correcto. Esto es aún más válido en una democracia donde los políticos pueden sentir la

certeza de que si fueron elegidos por el pueblo es porque éste confía en que ellos saben hallar las respuestas correctas. Así pues, los autores de la Constitución meditaban en cómo hacer que el gobierno fuera lo bastante fuerte para proteger a los ciudadanos, pero sin llegar a ser tan fuerte que se convirtiera en un bastión de poder sin freno.

Su respuesta consistió en dividir el poder para ponerle freno. Habría tres ramas de gobierno por separado: la presidencia, la legislatura (el Congreso) y el poder judicial. El Congreso no podría aprobar ninguna ley sin el consentimiento del presidente; el presidente no podría legislar políticas sin el consentimiento del Congreso; y ambos tendrían que rendir cuentas ante el poder judicial, el cual evaluaría sus acciones en función de los poderes otorgados a cada rama por la Constitución. La rama judicial sería la intérprete decisiva de la Constitución, la cual contendría la declaración definitiva de lo que el pueblo soberano quería que su gobierno hiciera y los límites impuestos al poder de éste. Si las “ramas políticas” —el presidente y el Congreso— trataban de trasponer esos lineamientos, los ciudadanos podían impugnar sus actos sobre una base constitucional en el sistema de tribunales. En esos casos, el poder judicial intervendría para invalidar todas las leyes que no fueran compatibles con la Constitución.

Como lo expresó uno de los forjadores de la Constitución, la rama judicial misma no tendría ni el poder del dinero ni el de la espada. La rama judicial no podría formar un ejército o un cuerpo policial para el cumplimiento a sus decretos, ni podría privar de presupuesto a las otras ramas del gobierno. Lo único que podría hacer sería mostrarse a sí misma con una independencia política tan completa, tan protectora de los derechos del pueblo, que tanto los políticos como los ciudadanos se sintieran obligados a obedecer sus decretos.

Para que el poder judicial pudiera hablar sin temor ni favoritismo, tendría que ser en verdad independiente; tendría que estar fuera del control de las otras ramas del gobierno. Por eso la Constitución de los EE.UU. dispone la instauración de una Corte Suprema. Así mismo, encomienda al Congreso la creación

de cortes federales de nivel más bajo y dispone que todos los jueces de esos órganos deben ser designados por el presidente y ratificados por voto de la mayoría en el Senado (la cámara alta del Congreso). El primer Congreso estableció un poder judicial federal de ese tipo, formado por cortes de primera instancia y tribunales intermedios de apelaciones, con la Corte Suprema como el tribunal de apelaciones final. Los jueces federales de todos los niveles ostentan puestos vitalicios (y, por ley, no se puede reducir el salario de un juez). Por lo tanto, ellos no se tienen que preocupar de ser destituidos si toman una decisión impopular. Un juez federal puede optar por separarse de la rama judicial para dedicarse a otra cosa, o bien, aunque el caso es raro, renunciar a su puesto para contender por un cargo público. Un juez de una de las cortes federales de primera instancia puede aspirar a ser asignado a un tribunal federal más alto; sin embargo, también en ese caso, dicho juez puede emitir sus veredictos sabiendo que tiene asegurado su trabajo por toda la vida y que no importa cuánta irritación puedan causar esas decisiones en los políticos o en el público en general.

Esta última declaración sugiere, al parecer, una paradoja. Por una parte, los jueces federales son designados para velar por que la voluntad del pueblo, tal como se expresa en su Constitución, sea lo primero. Por la otra, la designación vitalicia implica que los jueces pueden tomar decisiones que la población considere erróneas, y que pueden actuar en contra de la voluntad popular. Y bien, si los políticos de la presidencia y de la legislatura son los que escogen a los jueces, ¿no es factible que las decisiones de éstos reflejen las preferencias de un partido, en lugar de los deseos de la mayoría o las directrices constitucionales? Esto suscita la pregunta de cómo funciona en realidad el proceso de selección.

El proceso de selección y la independencia judicial

El presidente es quien designa a quienes habrán de ocupar todas las judicaturas federales vacantes, incluso las de la Corte Suprema, y es natural que los presidentes tiendan a elegir como posibles jueces a gente que concuerda con su propia filosofía.



Los dos estratos más bajos de las cortes federales tienen jurisdicción sobre áreas geográficas específicas y, por la deferencia recíproca que muestran los senadores a sus respectivas preferencias al decidir la ratificación de un nombramiento, los presidentes acostumbran consultar con los senadores representantes de un área específica antes de designar jueces a la misma. Pero no es así en la designación de jueces para la Corte Suprema, ya que éstos tienen jurisdicción nacional. También se hizo habitual, a fines del siglo XX, que los presidentes tomaran en cuenta la distribución geográfica, la religión, la raza y el género al designar a los integrantes del tribunal supremo, pues se supone que esto refuerza la credibilidad de una corte moderna.

Sin embargo, la vigencia vitalicia de esos jueces en su cargo limita la

influencia de los presidentes sobre los miembros de la Corte Suprema. Aun cuando las opiniones de los aspirantes a juez pueden ser evaluadas a partir de las decisiones que han tomado como políticos o como jueces de tribunales de primera instancia, es posible que eso no coincida con lo que harán cuando sean ascendidos al máximo tribunal. Por ejemplo en 1953, cuando el presidente Dwight Eisenhower designó a Earl Warren como presidente de la Corte Suprema, sabía muy bien que Warren era el ex procurador de California que estaba en funciones durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los estadounidenses de origen japonés de ese estado fueron llevados a campos de reubicación, y era también un ex fiscal y ex gobernador que trató con mano dura el delito y a los criminales. Sin embargo, como presidente de la Corte Suprema, Warren fue vital para forjar la opinión unánime de dicho tribunal acerca de que la segregación racial en las escuelas públicas era inconstitucional. La influencia de Warren fue, en gran parte, lo que en la década de 1960 condujo a su Corte Suprema a una interpretación de la Constitución según la cual ésta ordenaba dar un grado de protección mayor de lo habitual a los acusados, en su tránsito a través del sistema de justicia penal. Cuando la Corte de Warren puso fin a la tradición de conceder mayor peso en las elecciones legislativas a los votos de los ciudadanos de las áreas rurales, que a los de sus homólogos urbanos, se dice que la moción enfureció tanto a Eisenhower que lo indujo a decir que si hubiera previsto tal cosa, jamás habría designado a Warren como juez.

A pesar de que, sin duda, las razones por las que Warren emitió esos veredictos fueron, en parte, fruto de su propia personalidad, su aparente cambio de filosofía de gobierno reflejó también un fenómeno que es evidente en la carrera judicial de un buen número de jueces de la Corte Suprema. Muchos de ellos han desempeñado cargos de elección, donde la necesidad de satisfacer a los votantes y contender por la reelección los ha inducido a enfocar su atención justamente en el tipo de cuestiones políticas locales que los creadores de la Constitución trataron de evitar al decidir que la gestión de los jueces fuera vitalicia. Otros futu-

*En una sociedad libre,
los jueces son tan
ciudadanos como
cualquier otra persona.*

*Igual que todos
nosotros, es inevitable
que ellos reflejen las
creencias que eran
dominantes cuando
fueron elevados al
cargo.*

ros jueces son miembros de tribunales estatales en los que no tienen necesidad de interpretar la Constitución federal, o de tribunales federales de primera instancia donde pueden estar seguros de que si cometen un error en su interpretación de ese documento, la Corte Suprema se encargará de rectificarlo.

Sin embargo, una vez que llegan a la Corte Suprema, los jueces se liberan de la necesidad de halagar al sentimiento popular. Muy pronto se percatan de que ellos son los árbitros finales de la ley fundamental de la nación —no hay un tribunal más alto que enmiende sus errores— y es frecuente que reflejen en formas nuevas todo lo que los nobles textos de la Constitución significan y deberían significar.

La longevidad también influye en la independencia judicial. Los temas que pueden hacer que un presidente designe a una persona y no a otra como miembro de la Corte pueden llegar a ser irrelevantes para la agen-



En una sociedad libre, los jueces son tan ciudadanos como cualquier otra persona. Lo mismo que todos nosotros, es inevitable que ellos reflejen las creencias que eran dominantes cuando fueron elevados al cargo. Al mismo tiempo, son miembros de una sociedad cuyos valores están en constante evolución, como sucede en todas las sociedades, y en la cual se producen cambios tecnológicos que plantean nuevos problemas legales. Ellos hablan con la gente fuera del tribunal, leen los periódicos, miran la televisión y saben qué asuntos han llegado a ser tan importantes para la sociedad, que se los debe colocar en primer término en la agenda del Congreso y en las del presidente y las legislaturas de los estados. Cuando los jueces se encuentran con frases de la Constitución escritas en 1787, como “el comercio entre los diversos

plan vitalicio, en realidad son designados por su “buen comportamiento”, de tal manera que un acto delictivo o inaceptable por cualquier otra razón puede dar lugar a un juicio en el Congreso que conduzca a la destitución de un juez. Además, por medio de la legislación apropiada, el Congreso puede hacer que un rubro de la ley sea suprimido de la jurisdicción de apelaciones de la Corte Suprema. Esto significa, por ejemplo, que aquél podría resolver que la Corte no debe atender las apelaciones de tribunales menores en los casos que se originan en demandas de discriminación por causas religiosas o raciales.

Si bien es cierto que un puñado de jueces de tribunales menores han sido destituidos por el Congreso, de hecho, ningún juez de la Corte Suprema ha sido destituido jamás, a pesar de que muchos legisladores han vociferado contra algunos veredictos de ese tribunal. El Congreso



da política en los decenios que dura la gestión de un juez, y otros asuntos en los que no se pensaba en la época de su designación pueden aflorar al cabo de los años como las disputas políticas más apremiantes. El presidente no dispone de medios para evaluar cualquiera de esos fenómenos con anticipación. Cuando el presidente Richard Nixon designó al juez Warren Burger, quien provenía de un tribunal federal de primera instancia, como presidente del tribunal supremo en 1969, la cuestión de la igualdad de los géneros no figuraba en la lista de litigios de la Corte Suprema. Nixon no podía prever en forma alguna que ésa llegaría a ser una cuestión clave para la Corte de Burger en los años 70; ni tampoco habría podido elegir Nixon a un juez que tuviera una u otra forma de pensar a ese respecto.

estados” o “el debido proceso de ley” y las tratan de aplicar a casos específicos, no pueden menos que leer esas palabras con plena conciencia de lo que significa para la sociedad “comercio” en un momento dado o qué tipo de “proceso de ley” considera suficiente la sociedad de su tiempo.

A pesar de que están protegidos de los caprichos pasajeros de la sociedad y de la ambición humana, los jueces no viven ni emiten sus juicios en un vacío. La independencia judicial no implica un divorcio total de la voluntad popular y de los deseos de la mayoría, ni mucho menos, aun cuando sí les confiere una cierta medida de distancia.

Al sistema de los Estados Unidos se le han incorporado otros dos frenos para el poder judicial. A pesar de que, en general, se dice que los jueces federales detentan sus cargos en

ha usado con mucha parquedad su poder sobre la jurisdicción de las apelaciones. La causa de esta moderación se explica, en primer lugar, por la forma en que la Corte Suprema ha llevado a cabo su labor.

La Corte Suprema y la interpretación de la Constitución

La Constitución fue escrita en un momento de la historia de los Estados Unidos en que se suponía que la autoridad del gobierno federal estaría limitada en alto grado. Tras el inicio de la Revolución de los EE.UU. en 1776, las 13 ex colonias británicas que se reunieron para establecer la Unión ya se habían declarado estados independientes, dotados de todos los poderes de un gobierno. Sin embargo, después de lograr la victoria en la guerra y reconociendo la necesidad

de abordar los asuntos del exterior como una sola entidad y unificar las normas comerciales de la nación, las colonias estimaron que el gobierno nacional que instituirían para el ejercicio de esas funciones no debía adquirir una importancia primordial en la vida de los ciudadanos. Los estados mantendrían el control de su vida diaria en rubros tales como: seguridad pública, educación, bienestar, salud y comercio local.

Por lo tanto, la Constitución expresa el mandato popular en términos muy amplios. Por ejemplo, una de sus cláusulas confiere al Congreso el poder de regular el comercio con otras naciones y “entre los distintos estados”. Allá en el siglo XVIII, cuando la mayor parte del comercio era local, la frase “entre los distintos estados” se refería al comercio que en efecto cruzaba los linderos estatales. Con la revolución industrial del siglo XIX, la revolución tecnológica del siglo XX y el tipo de globalización que existe hoy, en los albores del siglo XXI, ese significado es mucho menos claro. Casi todos los bienes que se ofrecen en venta en las tiendas de cualquier estado son producidos ahora en otros estados (u otros países) y el pueblo de los EE.UU. depende tanto del intercambio interestatal como del comercio exterior para adquirir sus productos básicos. Las corporaciones ya son de alcance nacional (e internacional) y no local, y tienen poder suficiente para llevar sus productos a otra parte si un estado cualquiera intenta aplicarles reglamentos encaminados a favorecer la seguridad y el bienestar del público. ¿Quién protegerá a los consumidores de los productos de mala calidad o insalubres?

La respuesta de la Corte Suprema, a partir de la década de 1930, ha consistido en interpretar la cláusula de comercio en el sentido de que el gobierno federal puede regular todo el comercio que tenga algún componente interestatal, por muy pequeño o remoto que éste sea, y que lo hace con propósitos que guardan más relación con el bienestar del público que con el comercio como tal. El resultado es, por ejemplo, que las condiciones de salud en una fábrica pueden ser vigiladas por el gobierno federal cuando cualquiera de las materias primas que usa esa planta o alguno de los productos que genera ha sido transportado o lo será a



través de límites estatales. Los salarios y horarios de trabajo de los empleados de las fábricas y las tiendas están sujetos a la regulación federal, evidentemente porque muchos de los bienes que producen se venderán en otros estados. Los alimentos y fármacos no se pueden comercializar en los Estados Unidos si no han sido aprobados por el gobierno federal, por la evidente razón de que ellos también cruzan límites entre los estados. De hecho, con una interpretación tan amplia de esa imprecisa cláusula de comercio, la Corte Suprema ha hecho la política nacional y ha ayudado a crear una forma limitada de estado de bienestar, en el que los gobiernos asumen un grado sustancial de responsabilidad sobre la salud, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Otras cláusulas de la Constitución

*La Constitución
marca los límites de
la acción del gobierno
y, por extensión,
los límites del control
de la mayoría sobre
el individuo.*

han sido ampliadas por la Corte Suprema en forma similar. A través de los siglos, la Corte ha interpretado los primeros mandatos constitucionales de acuerdo con las necesidades sociales, según su percepción de dichas necesidades, dentro de un marco interpretativo que siempre ha sido respetuoso de la tradición constitucional de los EE.UU. Esto ha producido dos resultados.

Primero, en vista de que la Constitución ha sido interpretada por la Corte Suprema con un criterio que es evolutivo, pero respeta la tradición, la ciudadanía no ha tenido mucha necesidad de enmendarla. Hoy en día, la Constitución contiene sólo 27 enmiendas, 10 de las cuales fueron introducidas por el primer Congreso. Ese número resulta notablemente pequeño si se toma en cuenta la diferencia entre los Estados Unidos a fines del siglo XVIII y en la actualidad.

Segundo, por el hecho de que el electorado está satisfecho con el resultado de la interpretación de la Corte Suprema, ésta ha alcanzado poco a poco una categoría cercana a lo sagrado. Tal como se apreció en la forma en que el país aceptó el veredicto de la Corte sobre el vencedor de la elección presidencial del 2000, se supone que ese tribunal es capaz de interpretar los mandatos de la Constitución como ningún otro órgano lo podría hacer. Cada vez que el presidente y el Congreso promulgan un estatuto, la suposición lógica es que esos órganos, tan familiarizados con las disposiciones de la Constitución, estiman que la ley que han aprobado es congruente con ese documento. Sin embargo, si la Corte Suprema discrepa y se opone a la ley aduciendo que ésta transgrede los límites del poder gubernamental señalados en la Constitución, dicha ley se declara nula e inválida. En virtud de que los jueces de la Corte redactan opiniones jurídicas para explicar el razonamiento que sustenta sus decisiones, a veces las legislaturas revisan los estatutos que han sido anulados y tratan de hacer que sean compatibles con la resolución de la Corte. Sin embargo, el principal recurso que tiene el electorado en esas situaciones es enmendar la Constitución y, como lo hemos visto, eso no pasa con frecuencia. La explicación es que la gente le ha otorgado a la Corte Suprema una confianza

que proviene, en gran parte, de la forma en que ésta ha protegido los derechos individuales.

El poder judicial federal y los derechos humanos

El tipo de derechos que están protegidos por la Constitución de los Estados Unidos y por las de muchas otras naciones —la libertad de palabra, de prensa y de credo; de no ser sujeto de arresto arbitrario; de tener un juicio justo en el sistema de justicia penal; y así por el estilo— sugiere que a menudo la mayoría es la enemiga de los derechos. Si la mayoría cree de modo apasionado en una idea determinada, no recibirá de buen grado la expresión de la idea contraria y se sentirá tentada a suprimirla. Después de todo, el bienestar de la comunidad resulta afectado por las ideas que la gente profesa. Si la mayoría de la población de un país cree con la misma pasión en una religión en particular, la existencia de otras religiones que parezcan impugnarla no gozará de más aceptación popular que las ideas indeseables de cualquier otro tipo.

Sin embargo, como ya hemos visto, el punto de partida del sistema político de los EE.UU. es el individuo dotado de sus propios derechos. La Constitución marca los límites de la acción del gobierno y, por extensión, los límites del control de la mayoría sobre el individuo. Al incluir los derechos, la Constitución señala en efecto los rubros de la vida en los que es preciso dejar al individuo en libertad para que haga lo que mejor le parezca: estar de acuerdo o no con las ideas de la mayoría, profesar el credo que juzgue más adecuado y así sucesivamente.

De este modo, la pregunta se convierte en: ¿qué pasa cuando lo que el individuo considera como derechos está en conflicto con la voluntad de la mayoría? ¿Se puede confiar en que la mayoría pasará por alto sus propios e intensos sentimientos y respetará el principio de los derechos del individuo?

Como hemos visto, la respuesta de los forjadores de la Constitución fue que sería ingenuo dejar la protección de esos derechos en manos de la mayoría o de órganos de gobierno elegidos por ella. Fue necesario crear un poder judicial independiente que no temiera afirmar los derechos huma-

nos sin importar con cuánta pasión se opusiera la mayoría.

Las cortes federales han asumido con gran seriedad su papel de protectoras de los derechos humanos —o bien, de las libertades civiles y los derechos civiles, como se les llama de ordinario en los Estados Unidos—y, al hacerlo, han expandido esos derechos en formas que los forjadores de la Constitución no pudieron haber previsto. Por ejemplo, a pesar de que el “derecho a la vida privada” no se cita como tal en la Constitución, la Corte Suprema ha percibido la intención de protegerlo en ciertas cláusulas, como la garantía contra las inspecciones fuera de lo razonable y la garantía de la libertad de comunicación. Según la interpretación de la Corte, el derecho a la libertad de expresión no sólo abarca la televisión y la Internet, sino también formas de comunicación no verbal, como la expresión artística y el hecho de portar símbolos políticos.

Al afirmar los derechos de las personas, el poder judicial federal ha obedecido los mandatos de la Constitución, a despecho de las pasiones populares, en una forma que otros tribunales menos independientes no podrían igualar, y ha proclamado su propia identidad como una institución que forma parte del toma y daca de la vida política. En 1954, cuando la Corte de Earl Warren sostuvo por unanimidad que la segregación racial en las escuelas violaba la garantía constitucional de igual protección bajo la ley para todas las personas, otorgó un reconocimiento implícito y alentó al incipiente movimiento de los derechos civiles. A la postre, la Corte llegó a sentir que no podía interpretar la Constitución como un texto que prohíbe la discriminación racial en el ámbito privado, pero sus veredictos alentaron al Congreso a aprobar nuevas leyes que sí la prohibieran. Y cuando esas legislaciones del Congreso fueron impugnadas en los tribunales, la Corte Suprema les dio su apoyo. Cuando la Corte de Warren Burger resolvió por vez primera que la igualdad de los géneros era un asunto constitucional, reconoció en efecto la cambiante situación de las mujeres y dio al incipiente movimiento feminista la seguridad de que sus demandas

serían tomadas en serio, cuando menos por una de las ramas del gobierno. Lo que la Corte ha afirmado es que las personas que no son populares, las que son diferentes y las que impugnan el orden existente pueden ser escuchadas, a pesar de todo, en forma cabal cuando afirman que sus derechos han sido violados.

A fin de cuentas, ésta es la justificación para designar jueces y para hacer que sus cargos sean vitalicios. Como en el caso de la elección presidencial ya mencionada, los ciudadanos pueden no estar de acuerdo con algunos fallos específicos de la Corte Suprema. Sin embargo, la independencia de la rama judicial garantiza al electorado que la Corte casi siempre basará sus decisiones en la ley, no en la política partidista, y que lo hará sobre los principios rectores democráticos y no bajo las pasiones del momento. En última instancia, el papel del poder judicial independiente consiste en hacer realidad la creencia estadounidense de que el gobierno de la mayoría es sólo uno de los aspectos de la democracia real. La democracia consiste también, en un grado importante, en la protección de los derechos del individuo. Proveer esa protección es la tarea principal del poder judicial federal. ■

Para lecturas adicionales:

Henry J. Abraham, The Judiciary: The Supreme Court in the Government Process (10ª ed., New York University Press, 1996)

Vincent Blasi, comp., The Burger Court (Yale University Press, 1983)

Peter H. Irons, A People's History of the Supreme Court (Viking, 1999)

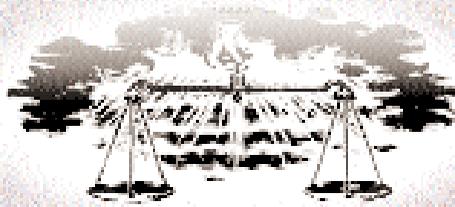
Anthony Lewis, Gideon's Trumpet (Vintage Books, 1999)

Robert G. McCloskey, The American Supreme Court (2ª ed., University of Chicago Press, 1994)

David M. O'Brien, Storm Center: The Supreme Court in American Politics (5ª ed., W.W. Norton, 2000; 4ª ed., ppk., W.W. Norton, 1996).



Documentos de la
DEMOCRACIA



OFICINA DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU.
<http://usinfo.state.gov>